



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

FACULTAT DE DRET



DICTAMEN JURÍDICO SOBRE DERECHO DE FAMILIA

TRABAJO FINAL DE MÁSTER DE ABOGACÍA

Autora: Raquel Torres Ferrer

NIUB: 16459004

Curso académico: 2018-2019

Universidad de Barcelona

Tutora: Dra. María Corona Quesada González

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES	1
1.1. HECHOS Y DATOS EN LOS QUE SE BASA EL PROBLEMA	1
1.2. DOCUMENTACIÓN	1
1.2.1. DOCUMENTACIÓN DE LA QUE DISPONEMOS.....	1
1.2.2. DOCUMENTACIÓN DE LA QUE CARECEMOS.....	2
1.3. CUESTIONES JURÍDICAS PLANTEADAS.....	2
 2. ANÁLISIS JURÍDICO.....	4
2.1. FUENTES APLICABLES AL CASO	4
2.1.1. NORMATIVA APLICABLE	4
2.1.2. JURISPRUDENCIA APLICABLE	5
2.2. ANÁLISIS DEL CASO	7
2.2.1. MARCO PROCESAL APLICABLE AL CASO	7
2.2.1.1. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES Y PROCEDIMIENTO	7
2.2.1.2. LEY APLICABLE AL CASO	8
2.2.2. DETERMINACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA PATERNIDAD. ALUSIÓN ESPECIAL AL RECONOCIMIENTO	10
2.2.3. RECONOCIMIENTO DE COMPLACENCIA.....	13
2.2.3.1. CONCEPTO	13
2.2.3.2. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES FRENTE A LOS RECONOCIMIENTOS DE COMPLACENCIA	14
2.2.3.3. LA VALIDEZ E IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE COMPLACENCIA.....	17
2.2.3.4. RECONOCIMIENTO DE CONVENIENCIA.....	21
2.2.4. ACCIONES DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD	23
2.2.5. MEDIDAS CAUTELARES	25
2.2.6. RECLAMACIÓN DE LAS CANTIDADES SUFRAGADAS POR EL ACTOR EN CONCEPTO DE ALIMENTOS.....	26
2.2.7. RECLAMACIÓN DE UNA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS AL MENOR: RESPONSABILIDAD DEL RECONOCEDOR	28
 3. CONCLUSIONES.....	30
 EMISIÓN DEL DICTAMEN.....	33
 BIBLIOGRAFÍA.....	35

1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

1.1. HECHOS Y DATOS EN LOS QUE SE BASA EL PROBLEMA

Los antecedentes de hecho de este caso son los siguientes:

PRIMERO.- El día 21 de junio de 2010 nació Eva, hija biológica de la Sra. Ana López, sin que en ese momento quedara determinada legalmente su paternidad. Tanto la Sra. López como Eva tienen vecindad civil común y residen en Tarragona.

SEGUNDO.- A principios de 2012 la Sra. Ana López conoce al Sr. Elías Jaguar, de nacionalidad peruana, con el que mantiene una relación.

TERCERO.- El Sr. Jaguar decide reconocer a Eva como hija suya a sabiendas de que no era el padre biológico, con el expreso consentimiento de la Sra. López.

CUATRO.- Posteriormente al reconocimiento, la Sra. López y el Sr. Jaguar contraen matrimonio.

QUINTO.- En el año 2018 el Sr. Jaguar, a raíz de abundantes desavenencias con la Sra. López, decide presentar una demanda solicitando la impugnación de la paternidad de Eva alegando su falta de veracidad.

SEXTO.- Además, el Sr. Jaguar pide que se le devuelva todo el dinero que se gastó en concepto de alimentos para Eva y los intereses correspondientes a esa cantidad.

A fecha 1 de septiembre de 2018, la Sra. López, parte demandada en este procedimiento, nos solicita la emisión del presente dictamen.

1.2. DOCUMENTACIÓN

1.2.1. DOCUMENTACIÓN DE LA QUE DISPONEMOS

Se nos facilita el certificado del Registro Civil del nacimiento y el certificado de empadronamiento de Eva.

1.2.2. DOCUMENTACIÓN DE LA QUE CARECEMOS

Para poder analizar el caso y defender a la Sra. López, resulta esencial disponer también del certificado del acta de reconocimiento de la paternidad de Eva por parte del Sr. Jaguar y del certificado literal de matrimonio de la Sra. López y Sr. Jaguar inscrito en el correspondiente Registro Civil.

Además, para acreditar que estamos ante un reconocimiento de complacencia, aparte de los documentos anteriormente citados, precisaremos de cualquier prueba documental relacionada con la menor y el Sr. Jaguar para constatar la relación paterno-filial existente entre ambos y la voluntad del Sr. Jaguar de ejercer como padre en el momento que se efectuó el reconocimiento.

Adicionalmente, a fin de que se establezca una pensión de alimentos a favor de Eva como medida cautelar, solicitaremos documentación patrimonial acreditativa de la situación económica y de las propiedades del Sr. Jaguar. Así por ejemplo:

- Declaraciones del IRPF del Sr. Jaguar.
- Extracto de todas las cuentas corrientes, de ahorro, de depósito, fondos de inversiones, pensiones y cualesquiera otras de las que resulte titular el Sr. Jaguar, desde el mes de enero de 2018 hasta la actualidad.
- Informe de la vida laboral del Sr. Jaguar.
- Nominas del Sr. Jaguar desde el mes de enero de 2018 hasta la actualidad.
- Títulos de propiedad sobre bienes y certificaciones registrales del Sr. Jaguar.

1.3. CUESTIONES JURÍDICAS PLANTEADAS

Atendiendo a los antecedentes fácticos del caso, se nos plantean las siguientes cuestiones sustantivas y procesales:

PRIMERA.- ¿Quiénes deben intervenir en el proceso de impugnación de la paternidad y en qué posición procesal?

SEGUNDA.- ¿Qué normas regulan el procedimiento de filiación?

TERCERA.- ¿Puede hacer algo la Sra. López para que no prospere ninguna acción de impugnación que interponga el Sr. Jaguar?

CUARTA.- ¿Puede solicitar la adopción de alguna medida cautelar con el fin de proteger mejor a su hija?

QUINTA.- Legitimación activa y pasiva.

SEXTA.- Procedimiento.

SÉPTIMA.- Medidas cautelares.

OCTAVA.- Plazo de ejercicio de las acciones que se ejercitan o, en su caso, se pueden ejercitar.

2. ANÁLISIS JURÍDICO

2.1. FUENTES APLICABLES AL CASO

2.1.1. NORMATIVA APLICABLE

Para proceder a la resolución de este caso, son aplicables las siguientes normas:

NORMATIVA INTERNACIONAL

- Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 20 de noviembre de 1989 (BOE, núm. 313, de 31 de diciembre de 1990).
- Carta Europea del Ejercicio de los Derechos del Niño, aprobado por el Parlamento Europeo, 21 de septiembre de 1992 (DOUE, núm. C241, de 21 de septiembre de 1992).
- Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, La Haya, 19 de octubre de 1996 (BOE, núm. 291, de 2 de diciembre de 2010).
- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobado por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión, 7 de diciembre de 2000 (DOUE, núm. 83, de 30 de marzo de 2010).

NORMATIVA ESTATAL

- Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil (BOE, núm. 151, de 10 de junio de 1957).
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE, núm. 157, 2 de julio de 1985).
- Constitución Española (BOE, núm. 311, de 29 de diciembre de 1987).
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (BOE, núm. 206, de 25 de julio de 1989).

- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE, núm. 7 de 8 de enero de 2000).
- Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE, núm. 175, de 22 de julio de 2011).
- Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE, núm. 158, de 3 de julio de 2015).

NORMATIVA AUTONÓMICA CATALANA

- Ley 29/2002, de 30 de diciembre , primera ley del Código Civil de Cataluña (DOGC, núm. 3798, de 13 de enero de 2003).
- Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (BOE, núm. 172, de 20 de julio de 2006).
- Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia (DOGC, núm. 5641, de 2 de junio de 2010).
- Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia (DOGC, núm. 5686, de 5 de agosto de 2010).

2.1.2. JURISPRUDENCIA APLICABLE

El presente dictamen se ha válido de la siguiente jurisprudencia:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

- Sentencia del Tribunal Constitucional 73/1988 (Sala 2ª), de 21 de abril 1988 (recurso 930/1986).
- Sentencia del Tribunal Constitucional 7/1994 (Sala 1ª), de 17 de enero de 1994 (recurso 1407/1992).
- Sentencia del Tribunal Constitucional 138/2005 (Pleno), de 26 de mayo de 2005 (recurso 929/1996).

TRIBUNAL SUPREMO

- Sentencia del Tribunal Supremo 776/1999 (Sala Civil, sección 1ª), de 21 de septiembre de 1999 (recurso 2854/1994).

- Sentencia del Tribunal Supremo 280/2001 (Sala Civil, Pleno), de 26 de marzo de 2001 (recurso 638/1996).
- Sentencia del Tribunal Supremo 793/2004 (Sala Civil, sección 1ª), de 14 de julio de 2004 (recurso 2576/2000).
- Sentencia del Tribunal Supremo 138/2005 (Sala Civil, Pleno), de 26 de mayo de 2005 (recurso 929/1996).
- Sentencia del Tribunal Supremo 512/2009 (Sala Civil, sección 1ª), de 30 de junio de 2009 (recurso 532/2005).
- Sentencia del Tribunal Supremo 320/2011 (Sala Civil, sección 1ª), de 12 de mayo de 2011 (recurso 1334/2008).
- Sentencia del Tribunal Supremo 318/2011 (Sala Civil, Pleno), de 4 de julio de 2011 (recurso 385/2007).
- Sentencia del Tribunal Supremo 202/2016 (Sala Civil, Pleno), de 24 de abril de 2015 (recurso 1254/2013).
- Sentencia del Tribunal Supremo 494/2016 (Sala Civil, Pleno), de 15 de julio de 2016 (recurso 1290/2015).

AUDIENCIAS PROVINCIALES

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares 62/2000 (sección 5ª), de 28 de enero de 2000 (recurso 603/1999).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 421/2003 (sección 2ª), de 14 de julio de 2003 (recurso 135/2003).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 236/2005 (Sección 1ª), de 15 de julio de 2005 (recurso 220/2005).
- Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 90/2009 (sección 22ª), de 17 de marzo de 2009 (recurso 1371/2008).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 793/2015 (sección 12ª), de 30 de noviembre de 2015 (Recurso 257/2014).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona 119/2017 (sección 1ª), de 17 de marzo de 2017 (recurso 771/2015).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona 278/2017 (sección 1ª), de 20 de julio de 2017 (recurso 308/2017).

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 84/2018 (sección 2ª), de 2 de febrero de 2018 (recurso 79/2018).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 153/2018 (sección 12ª), de 6 de febrero de 2018 (recurso 719/2017).

2.2. ANÁLISIS DEL CASO

2.2.1. MARCO PROCESAL APLICABLE AL CASO

2.2.1.1. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES Y PROCEDIMIENTO

Es apropiado, primeramente, para situarnos, aclarar ciertas cuestiones procesales básicas para trazar unas líneas generales sobre la competencia judicial y el procedimiento.

Respecto a la competencia objetiva en los procedimientos de impugnación de la filiación corresponde la misma a los Juzgados de Primera Instancia de acuerdo con el artículo 85.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (a partir de ahora LOPJ) y el artículo 45 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, Enjuiciamiento Civil (a partir de ahora LEC). En cuanto la competencia territorial, la demanda debe ser presentada ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado, y si lo tuviera en el extranjero el de la última residencia en España, en aplicación de los fueros generales de las personas físicas regulados en el artículo 50 LEC.

Por tanto, en el caso que nos ampara, la demanda deberá ser presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de Tarragona, por ser el domicilio de la madre e hija.

Respecto las reglas procesales de los procedimientos de filiación, éstas están reguladas por los artículos 748 y siguientes de la LEC. En estos procedimientos siempre será parte el Ministerio Fiscal, aunque no sea el promotor de la acción ni deba asumir la defensa de alguna de las partes y éstas deberán preceptivamente asistir con abogado y procurador pudiendo solicitar asistencia jurídica gratuita. Además, en los casos que

exista un conflicto entre el menor y su representante legal se exige la intervención de un defensor judicial que represente al menor.

Tal como establece el artículo 753 LEC los procesos de impugnación de la paternidad se sustanciarán por las normas del juicio verbal, con la especialidad de que la demanda deberá contestarse en el plazo de veinte días desde que sean emplazados para ello. Asimismo, en la celebración de la vista del juicio, el Tribunal permitirá a las partes formular oralmente sus conclusiones, siendo de aplicación a tal fin lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 433 LEC.

Además, en estos procedimientos no surtirá efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción y el desistimiento requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal en los procesos que afecten menores. Así, como excepción al principio de publicidad, los Tribunales, de oficio o a instancia de parte, podrán acordar que los actos y vistas se celebran a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas. Por último, la LEC establece que las sentencias y resoluciones de dichos procedimientos se comunicaran de oficio a los Registros Civiles para la práctica de los asientos correspondientes.

En cuanto a los medios de prueba, el artículo 235-15 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, (a partir de ahora CCCat) establece que no será requisito necesario la presentación de ningún principio de prueba a la hora de ejercer la acción de impugnación y se admitirá cualquier tipo de prueba¹.

2.2.1.2. LEY APLICABLE AL CASO

Antes de entrar a analizar las cuestiones de fondo del caso, hemos de plantearnos cual es la ley aplicable en el presente supuesto, pues tal y como se desprende de los antecedentes de hecho, la Sra. López y Eva tienen vecindad civil común y viven en Tarragona y el Sr. Jaguar tiene nacionalidad peruana, por lo que la ley aplicable en este caso puede ser objeto de confusión.

A la hora de resolver los conflictos que surgen por la coexistencia de diversas legislaciones civiles en el territorio español, es de aplicación el artículo 16 del Código

¹ GETE-ALONSO Y CALERA, M. C.; YSÀS SOLANES, M.; SOLÉ RESINA, J., *Derecho de familia vigente en Cataluña*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 61.

Civil (a partir de ahora CC) que nos remite al capítulo IV del mismo código relativo a las normas de derecho internacional privado. Dentro de este capítulo encontramos el artículo 9.4 CC, dividido en dos apartados, que fija la ley aplicable en materia de filiación por naturaleza.

El apartado uno del artículo 9.4. CC determina la ley reguladora de la filiación introduciendo una norma de conflicto que fija tres puntos de conexión organizados jerárquicamente o en cascada², de tal forma que la aplicación de un punto excluye la aplicación de los puntos posteriores. En primer lugar, la determinación y el carácter de la filiación se regirán por la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación³. Subsidiariamente, en el caso que el hijo no tenga una residencia habitual o que esta ley no permita el establecimiento de la filiación, se aplicara la ley nacional del hijo. Finalmente, si ninguna de las dos opciones anteriores fuere posible, se aplicará la ley sustantiva española.

El artículo 9.4 CC especifica que el momento que se tendrá en cuenta a la hora de determinar cual es la ley aplicable al caso concreto, será el momento de establecimiento de la filiación. No obstante, según ADAM MUÑOZ, “el momento en que se ha de retener la ley aplicable a la filiación es el momento en que se presenta la demanda”⁴. En el mismo sentido lo entiende la jurisprudencia, que traslada por analogía lo que establece el artículo 22 quáter de la LOPJ en relación con la ley aplicable y a la competencia judicial internacional, el cual estipula que serán competente les tribunales españoles en materia de filiación cuando el hijo tenga la residencia habitual en España en el momento de la interposición de la demanda.

Así, tal como hemos podido observar, el interés superior del menor es el eje con el que se fundamenta el artículo 9.4 CC el cual potencia el *favor filii* y desvincula la ley

² CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., “Ley aplicable a la filiación por naturaleza: de la ley nacional a la ley de la residencia habitual del hijo”, en: *Revista española de derecho internacional*, vol. 68, nº 2, julio-diciembre 2016, p. 159.

³ Anteriormente a la modificación del artículo 9.4, apartado 1, del CC por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en los casos de filiación natural la ley aplicable dependía de la ley personal del hijo, es decir, de su nacionalidad, por lo que los Tribunales españoles se veían obligados a aplicar leyes extranjeras que podían ser desfavorables al hijo.

⁴ ADAM MUÑOZ D., “La nueva regulación de la filiación natural en el derecho internacional privado español”, en: *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 8, nº 2, octubre 2016, pp. 40-42.

aplicable de sus progenitores⁵. Además, la preferencia de la ley de residencia habitual ante la nacionalidad de hijo supone la armonización y la adaptación de nuestro derecho al derecho de la Unión Europea.

El segundo apartado del artículo 9.4 CC establece que el contenido de la filiación junto con la responsabilidad parental es regulado por el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Basándonos en esto y atendiendo a la interpretación de que ley especial prima sobre la ley general, solamente quedaran regidos por el referido Convenio los efectos de la filiación que no están regulados específicamente en el derecho español o catalán.

Por ende, y volviendo al caso, en virtud de los artículos 16 y 9.4 CC y atendiendo que la residencia de Eva está en Tarragona, son de aplicación las normas sustantivas del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, y en concreto el Capítulo V del Título III, por aplicación territorial, a tenor del artículo 14.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y del artículo 111.3.1 del CCCat⁶.

2.2.2. DETERMINACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA PATERNIDAD. ALUSIÓN ESPECIAL AL RECONOCIMIENTO

El Código Civil catalán diferencia entre la filiación extrajudicial matrimonial y la no matrimonial. No obstante esta diferenciación, de acuerdo con los artículos 14 y 39 de la Constitución Española (a partir de ahora CE), el derecho catalán iguala en su artículo 235-2 CCCat a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales ante la ley, protegiendo ambos de forma idéntica.

⁵ LORENTE MARTÍNEZ, I., “Filiación natural. El artículo 9.4 del Código Civil y el triunfo de la residencia habitual del hijo”, en: *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 10, nº 1, marzo 2018, pp. 591-600.

⁶ En este sentido resuelven sobre dicha cuestión las siguientes sentencias: SAP de Tarragona 278/2017, de 20 de julio de 2017, SAP de Barcelona 153/2018, de 6 de febrero de 2018 y SAP de Barcelona 793/2015, de 30 de noviembre de 2015.

Por un lado, según el artículo 235-5 CCCat se entiende que la filiación es matrimonial, en términos generales, cuando el hijo nace después de la celebración del matrimonio de sus progenitores, aunque la concepción sea previa al matrimonio. Además, según el artículo 235-7 CCCat, los hijos comunes nacidos antes del matrimonio son considerados matrimoniales desde la fecha de celebración del matrimonio⁷.

Por otro lado, se entiende que la filiación es no matrimonial cuando los progenitores no están casados ni en el momento de la concepción, ni del nacimiento ni posteriormente⁸. De este modo, el artículo 235-9.1.a) CCCat establece que la filiación no matrimonial extrajudicial se podrá determinar mediante el reconocimiento formal, en testamento o codicilo, escritura pública, o ante la persona encargada del Registro Civil o mediante resolución dictada en expediente tramitado de acuerdo con la legislación del Registro Civil.

La mayoría de filiaciones extrajudiciales se determinan a través del reconocimiento ante el encargado del Registro Civil. El reconocimiento es un acto jurídico formal y voluntario que se realiza con la voluntad de determinar extrajudicialmente la filiación no matrimonial. El efecto del reconocimiento es el establecimiento de la relación de filiación la cual tiene efectos retroactivos desde el momento del nacimiento del hijo. Este reconocimiento se caracteriza por ser un acto jurídico unilateral, personalísimo e irrevocable. Asimismo, según el artículo 235-9.2 CCCat cuando dicho reconocimiento se realice de modo individual será confidencial por no poder manifestar la identidad del otro progenitor si no ha sido determinada legalmente.

El reconocimiento tiene carácter irrevocable por el hecho de que si no fuera así los efectos del reconocimiento quedarían al arbitrio de la voluntad de su autor, y podría en cualquier momento dejarlo sin efecto⁹. No obstante, según la jurisprudencia mayoritaria, la irrevocabilidad de los reconocimientos no impide que puedan ser impugnados,

⁷ No obstante, el apartado 2 del artículo 235-7 CCCat clarifica que aunque sea considerado como hijo matrimonial, la acción de impugnación de la filiación se regirá por las reglas de la filiación no matrimonial.

⁸ En materia de filiación, el Código Civil catalán asimila a los hijos de las parejas estables a los hijos extramatrimoniales. En este sentido, no se equipara la relación de convivencia análoga a la conyugal al matrimonio.

⁹ GALLO VÉLEZ, A.S., *Los reconocimientos de complacencia en el Derecho Común español*, Dykinson, Madrid, 2018, p. 57.

porque entiende, que la impugnación por falta de nexo biológico y consecuentemente, su ineficacia, no supone una revocación¹⁰.

En cuanto a los requisitos para realizar el reconocimiento de filiación, el artículo 235-11 CCCat establece que tienen capacidad las personas mayores de catorce años, siempre que tengan capacidad natural. Además, el artículo 235-12 CCCat regula que en el caso que el reconocido sea mayor de edad o esté emancipado se deberá contar con el consentimiento expreso o tácito del hijo y cuando el reconocido sea menor de edad o incapaz, se requerirá aprobación del juez, del otro progenitor si es conocido y del representante legal del menor, previa audiencia del ministerio fiscal¹¹. En esta aprobación judicial, según el artículo 26 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, se tendrá en cuenta la verosimilitud de la filiación, aunque sin necesidad de una prueba plena de la misma, atendiendo conjuntamente los intereses del progenitor y del menor.

El reconocimiento ante el Registro Civil, regulado por la Ley del Registro Civil¹² (a partir de ahora LRC), es una declaración formal que puede realizarse en el momento del nacimiento del hijo o en cualquier momento posterior al nacimiento del mismo (Art. 44 LRC/2011). A fin de evitar los reconocimientos de complacencia, la LRC/1957 en su artículo 26 establece que el encargado debe comprobar la veracidad del acto realizado¹³. En caso que el encargado tenga dudas fundadas sobre la veracidad de las declaraciones, deberá llevar a cabo las comprobaciones pertinentes (art. 30 LRC/1957). Por tanto, si el encargado detecta falta de veracidad, dictará resolución denegando la inscripción del reconocimiento.

No obstante, la Dirección General de los Registros y del Notariado (a partir de ahora DGRN) en sus resoluciones de 22 de diciembre de 1994 y 6 de noviembre de 1993 (entre otras) ha establecido que es imprudente investigar la veracidad de la declaración de manera extrajudicial, debido a que el encargado del Registro Civil se estaría

¹⁰ GONZÁLEZ PÉREZ DE CASTRO, M., *La verdad biológica en la determinación de la filiación*, Dykinson, Madrid, 2013, pp. 150-151.

¹¹ GETE-ALONSO Y CALERA, M. C.; YSÀS SOLANES, M.; SOLÉ RESINA, J., ob. cit., pp. 57-58.

¹² Actualmente está vigente la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, no obstante ya han entrado en vigor, sustituyendo los de la regulación anterior, varios artículos de la Ley 20/2011, de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, así como aquellos relativos a la inscripción del nacimiento.

¹³ PADIAL ALBAS, A., *La relación materno y paterno filial en el derecho de familia catalán*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018, p. 53

extralimitando de sus funciones¹⁴. Asimismo, a su entender, las simples suposiciones no deben impedir la inscripción del reconocimiento, sino que solo se podrá rechazar la inscripción cuando haya “datos significativos y concluyentes” de los que se desprenda la falta de realidad biológica¹⁵.

En relación con lo anterior, RIVERO HERNÁNDEZ considera que el legislador otorga presunción de veracidad a quien declara a través del reconocimiento ser padre cuando cumple con todos los requisitos exigidos¹⁶. Así, GALLO VÉLEZ opina que el legislador entiende que quien realiza este reconocimiento es consiente de las trascendentales consecuencias que genera dicho acto, por lo que da por sentado que dicha persona no va a faltar a la verdad¹⁷. La mayoría de la doctrina entiende estos reconocimientos como una imperfección en el sistema jurídico de la filiación a consecuencia del amplio espacio dejado a la autonomía de la voluntad de quien determina la filiación extrajudicial y de la insuficiencia de controles que existen para impedir los reconocimientos que no se ajustan a la realidad.

En el caso que se nos plantea, teniendo en cuenta que el Sr. Jaguar reconoció a Eva como hija suya a través de un reconocimiento ante el Registro Civil y que, posteriormente se caso con la Sra. López, la filiación devino matrimonial desde la fecha de tal matrimonio de acuerdo con el artículo 235-7 CCCat¹⁸.

2.2.3. RECONOCIMIENTO DE COMPLACENCIA

2.2.3.1. CONCEPTO

Hoy en día la verdad biológica en la filiación no es un criterio socialmente prioritario, pues la filiación por naturaleza puede estar fundada en una relación biológica o en la voluntad de ejercer como madre o padre. En este segundo supuesto están los reconocimientos de complacencia los cuales no están regulados de forma explícita por

¹⁴ GALLO VÉLEZ, A.S., ob. cit., p. 132.

¹⁵ GONZÁLEZ PÉREZ DE CASTRO, M., ob. cit., p. 179.

¹⁶ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Los reconocimientos de complacencia (con ocasión de unas sentencias recientes)”, en: *Anuario de derecho civil*, Madrid, vol. 58, nº 3, 2005, pp. 1110-1111.

¹⁷ GALLO VÉLEZ, A. S., ob. cit., pp. 101-102.

¹⁸ En este sentido se pronuncia la SAP Barcelona 84/2018, de fecha 2 de febrero de 2018.

la normativa catalana ni por la española. Por este motivo y atendiendo a la escasa doctrina y jurisprudencia que existe alrededor de dichos reconocimientos en el derecho catalán, a fin de poder analizar detalladamente la figura del reconocimiento de complacencia, debemos trasladar los razonamiento de la doctrina y jurisprudencia española al derecho catalán.

A través de la doctrina y jurisprudencia entendemos que los reconocimientos de complacencia son reconocimientos en los que el reconocedor es consiente que no existe relación biológica entre él y el reconocido, y pese a ello, tiene la intención y deseo de ejercer como padre, con los deberes y cargas que ello impone.

Así, GALLO VÉLEZ entiende el reconocimiento de complacencia como “una declaración de reconocimiento de filiación que efectúa el autor del reconocimiento, por medio de la cual se va a determinar una relación paterno-filial, con previo conocimiento y certidumbre de la inexistencia del nexo biológico con el reconocido”¹⁹. Por otro lado, RIVERO HERNÁNDEZ con términos más generales lo define como “aquél en que el reconocedor es consiente de la falta de relación biológica con el reconocido”²⁰.

Así entonces, la reciente STS 494/2016, de 15 de julio de 2016, la define de la siguiente manera: cuando el reconocedor “sabiendo o teniendo la convicción de que no es el padre biológico del reconocido, declara su voluntad de reconocerlo con el propósito práctico de tenerlo por hijo biológico suyo: con la finalidad jurídica de constituir entre ambos una relación jurídica de filiación paterna como la que es propia de la paternidad por naturaleza”.

2.2.3.2. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES FRENTE A LOS RECONOCIMIENTOS DE COMPLACENCIA

En los reconocimientos de complacencia, principalmente, se ven afectados y colisionan dos principios constitucionales: el principio de verdad biológica y el interés superior del menor.

¹⁹ GALLO VÉLEZ, A. S., ob. cit., p. 87.

²⁰ RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Los reconocimientos de complacencia...*, ob. cit., p. 1060.

El principio de veracidad biológica es uno de los principios con más amplia tradición en el ordenamiento jurídico catalán. El CCCat entiende el principio de verdad biológica como requisito básico en el que se ha de fundamentar la filiación natural. Sin embargo, este principio se estableció de forma indiscriminada, ya que sino no se entiende que los hijos que nacen a consecuencia de las técnicas de reproducción asistida se hayan equiparado al hijo por naturaleza. En este caso, por tanto, prima el consentimiento de ambos progenitores al principio de veracidad biológica (arts. 235-8, 235-13 y 235-28.2 CCCat).

Además del principio referido anteriormente, también entra en colisión con el interés del menor el principio de interés superior de los progenitores, ya que en muchos casos el interés del menor se ve perjudicado y marginado por la defensa de los derechos individuales de los padres.

En la normativa catalana el principio *favor filii* se consagra en el artículo 211.6 CCCat como criterio básico inspirador de cualquier decisión que afecte al menor. También, la Ley catalana 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia, establece el principio de interés superior del niño como principio “inspirador y fundamentador de las actuaciones públicas”. Asimismo, este principio tiene su apoyo en el artículo 39 CE que consagra una especial protección al menor ordenando a los poderes públicos que aseguren la “protección integral de los hijos”, con independencia de su filiación. No obstante, en ninguna de las normas aplicables se da una definición específica del que significa este principio.

Junto a esta normativa están los Tratados Internacionales que ayudan a sustentar este principio. Así, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece en su Título III que “en todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial”. En el mismo sentido encontramos la Carta de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Tal y como nos hemos referido antes, no existe una definición jurídica para este principio, sino que es un concepto indeterminado que sirve como pauta para la resolución de conflictos.

Así, GONZÁLEZ PÉREZ considera beneficioso para el interés del menor que este principio sea abstracto, ya que nos permite dar una solución a cada supuesto que se plantea²¹. Ahora bien, tal como argumenta PADIAL ALBAS, “el interés superior del menor trata de un concepto jurídico indeterminado que se debe concretar en la práctica, y ahí radica la dificultad, ya que las personas que deben aplicar y valorar este criterio, principalmente los jueces, lo hacen desde sus propias convicciones, o visión personal; y frecuentemente se olvida, que el interés del niño/a debería atender a sus propios deseos, sentimientos, necesidades. De modo que el juez debe optar por lo que interesa o beneficia al menor en cada caso concreto”. La autora concluye que a la hora de ponderar este principio se debe valorar tanto el interés actual del menor como el interés futuro²².

No podemos menoscabar el principio de interés superior del menor, solo por el hecho de que en nuestra cultura jurídica la filiación solo se haya permitido cuando concordaba con la verdad biológica, cuando es bien sabido que la paternidad es ejercitada independientemente de este hecho. En todo caso, debemos dar más prioridad al interés del menor que a la verdad biológica y debemos evitar que el *favor progenitoris*, por muy legítimo que sea, se preserve con mayor intensidad que el *favor filii*. De este modo, el principio de interés superior del menor debe conllevar la seguridad jurídica y estabilidad del menor en una determinada familia.

Según GONZÁLEZ PÉREZ, “si el *favor filii* se restringe únicamente a la preeminencia de la verdad biológica, pierde entidad y superioridad, más aún, se anula, y la verdad de sangre se convierte en el único principio rector de la filiación. Lo que no obedece a la legislación vigente”. La autora opina que no podemos aplicar la verdad biológica de forma automática y general sin tener en cuenta cada caso concreto y lo que beneficia realmente al hijo, sino que hemos de reivindicar la primacía del principio del interés superior del menor e imponer límites a la verdad biológica²³.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo siempre ha sido contradictoria. Por un lado, sentencias como STSS 512/2009, de 30 de junio de 2009 y 320/2011, 12 de mayo de 2011 defienden que ante un conflicto entre la verdad biológica

²¹ GONZÁLEZ PÉREZ DE CASTRO, M., ob. cit., p. 60.

²² PADIAL ALBAS, A., ob. cit., p. 24.

²³ GONZÁLEZ PÉREZ DE CASTRO, M., ob. cit., p. 65.

y el interés superior del menor debe prevalecer el segundo frente a posibles intereses de los progenitores. Sin embargo, una jurisprudencia mayoritaria, así como sentencias STC 7/1994, de 17 de enero de 1994 y STS 776/1999, de 21 de septiembre de 1999, entienden que la exigencia de la verdad biológica va ligada al beneficio del hijo.

En otro sentido, a la hora de ejercer las acciones de filiación, en especial, cuando nos referimos a los plazos de caducidad, existe una colisión entre el principio de verdad biológica y el principio de seguridad jurídica (art. 39 CE).

Según GALLO PÉREZ, la caducidad de las acciones de filiación se sustenta en el principio de seguridad jurídica y en la estabilidad del estado civil²⁴. La doctrina afirma que el legislador dio prioridad a la estabilidad y armonía de los menores que al principio de verdad biológica al establecer plazos cortos y específicos para impugnar la paternidad. El legislador aceptó, en beneficio del interés del menor, que la filiación no iba a coincidir con la verdad biológica²⁵.

2.2.3.3. LA VALIDEZ E IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE COMPLACENCIA

Un amplio sector de la doctrina y jurisprudencia considera los reconocimientos de complacencia como válidos por lo que entienden que el reconocimiento como acto jurídico no puede ser impugnado directamente.

El TS en su reciente sentencia 494/2016, de 15 de julio, ha optado y fijado que los reconocimientos de complacencia son válidos pese que quien reconoce sea consiente que no es el padre biológico. El TS alega que el reconocimiento no es contrario a la ley porque el autor del reconocimiento de complacencia no pretende establecer una relación jurídica de filiación adoptiva con el reconocedor. Además, la sentencia argumenta que el reconocimiento tampoco es contrario al orden público, ya que el legislador permite

²⁴ GALLO VÉLEZ, A. S., ob. cit., pp. 273-274.

²⁵ El Tribunal Constitucional en la STC 138/2005, de 26 de mayo de 2005, estableció que los plazos de caducidad en las acciones de filiación tienen como fin la protección de los intereses de los hijos y dar seguridad a las relaciones paterno-filiales (art. 39.1 y 2). De la misma manera se ha pronunciado en diferentes ocasiones el Tribunal Supremo, así como STSS 280/2001, de 26 de marzo 2001, 793/2004, de 14 de julio de 2004 y 318/2011, de 4 de julio de 2011.

las técnicas de reproducción humana, ni a la moral, ya que estos están socialmente admitidos y son frecuentes en la sociedad.

Asimismo, en esta sentencia, el TS establece que “La nulidad de los referidos reconocimientos no encuentra tampoco soporte en la norma del artículo 6.4 CC (fraude objetivo de las normas sobre la adopción) [...] y obviamente el reconocimiento de complacencia no vale para establecer una filiación adoptiva entre el reconocedor y el reconocido”.

Esta línea argumentativa basa su criterio en que el requisito de verdad biológica debe ajustarse al “principio de seguridad jurídica en las relaciones familiares y de estabilidad de los estados civiles, especialmente en interés de los menores de edad” y no podemos imponer que “la verdad biológica prevalezca siempre sobre la realidad jurídica”²⁶.

En este sentido QUICIOS MOLINA entiende que “la verdad biológica, una vez determinada la filiación, deja de ser requisito esencial del reconocimiento, que si falla provoque su nulidad”. La autora argumenta que en el momento que el ordenamiento jurídico fija unos plazos para impugnar y limita la legitimación activa, permite la existencia de relaciones jurídicas de filiación contrarias a la realidad biológica. Además, razona que no podemos tolerar, en base al interés del menor, que una persona que reconoció por voluntad propia una filiación, pueda impugnar el reconocimiento por no corresponder al principio de verdad biológica en cualquier momento que lo desee²⁷.

Asimismo, GONZÁLEZ PÉREZ no concibe la verdad biológica como un elemento esencial del reconocimiento y considera que su invalidez solo puede devenir cuando la finalidad por la que se determina la filiación es otra que la de asunción de una relación de paternidad. La autora considera que los reconocimientos de complacencia son válidos porque el reconocedor no persigue la defraudación y además, éstos cumplen todos los requisitos formales para su existencia. En consecuencia, la autora afirma que

²⁶ PANIZA FULLANA, A., *Realidad biológica versus realidad jurídica: el necesario replanteamiento de la filiación*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017, p. 59.

²⁷ QUICIOS MOLINA, S., *Determinación e impugnación de la filiación*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 191-192.

“lo que es *contra legem* es permitir la impugnación de estos reconocimientos mediante la acción de nulidad”²⁸.

En contra, existe una doctrina menos amplia que defiende la nulidad de pleno derecho de estos reconocimientos atendiendo a que el vínculo biológico es imprescindible para la validez de estos reconocimientos. En este sentido, RIVERO HERNÁNDEZ considera dicho acto como nulo y *contra legem* ya que contraviene las normas imperativas y principios básicos del ordenamiento jurídico²⁹. La jurisprudencia defensora de esta doctrina defiende la invalidez del reconocimiento de complacencia manifestando que la verdad biológica es el principio preeminente en la determinación de la filiación y este principio es incompatible con la protección integral de los hijos.

Asimismo, las resoluciones de fecha 6 de julio de 2006 y 29 de octubre de 2012, entre otras, de la DGRN, en relación con el derecho español, vienen calificando como nulos los reconocimientos de complacencia, sosteniendo lo siguiente: “Hay que insistir en la idea de que la regulación de la filiación en el CC se inspira en el principio de la veracidad biológica, de modo que un reconocimiento de complacencia de la paternidad no matrimonial es nulo de pleno derecho y no podrá ser inscrito cuando haya en las actuaciones datos significativos y concluyentes de los que se deduzca que tal reconocimiento no se ajusta a la realidad”.

En atención a todos estos autores y estas resoluciones de la DGRN, podemos constatar la división doctrinal que existe en relación con la validez o nulidad de estos reconocimientos y que, posteriormente, se plasma en la contrariedad jurisdiccional española tanto en Primeras Instancias, Audiencias Provinciales como en el Tribunal Supremo. Actualmente, como hemos apuntado antes, el criterio seguido por el TS es considerar estos reconocimientos como válidos.

Por otro lado, a pesar de que la doctrina jurisprudencial opta por la validez del reconocimiento, la jurisprudencia mayoritaria no priva al reconocedor de impugnar la paternidad determinada por reconocimiento, provocando, si prospera, la ineficacia

²⁸ GONZÁLEZ PÉREZ DE CASTRO, M., ob. cit., pp. 186-187.

²⁹ RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Los reconocimientos de complacencia...*, ob. cit., p. 1076.

sobrevenida del reconocimiento. Así, esta doctrina y jurisprudencia entiende que la filiación puede impugnarse por la falta de verdad biológica³⁰.

Sin embargo, existe una jurisprudencia minoritaria que opta por impedir la impugnación de la filiación derivada del reconocimiento de complacencia. Ésta sostiene que ni la madre ni el padre conocedores de la inexistencia de relación biológica entre reconocedor y reconocido podrá impugnar el reconocimiento, ya que en caso contrario estaría realizando una revocación de un acto que es irrevocable. Además, esta doctrina defiende que el principio de verdad biológica debe tener como límites la seguridad del menor y la estabilidad de su estado civil³¹.

En primer lugar, esta corriente entiende que permitir la impugnación del reconocimiento de complacencia es contrario al artículo 39.2 de la CE por dejar la validez de tal reconocimiento a la voluntad de una persona, el reconocedor. En segundo lugar, entiende que revocar el reconocimiento supondría atentar contra la seguridad del estado civil del menor el cual está sometido a normas imperativas e indisponibles, quedando fuera de la autonomía de la voluntad³². Además, el reconocimiento como acto puro no acepta condiciones accesorias de la voluntad, por lo que el estado civil no puede ser limitado. En tercer lugar, estima que el principio de verdad biológica no es absoluto en la filiación por naturaleza, ya que el ordenamiento jurídico permite otras situaciones que consienten la filiación no biológica, así como las técnicas de reproducción asistida. En

³⁰ En este sentido la STS 494/2016, de 15 de julio de 2016, considera que la ineficacia sobrevenida del reconocimiento a causa de la impugnación de la paternidad por falta de verdad biológica no supone una revocación.

³¹ En este sentido GONZÁLEZ PÉREZ DE CASTRO, M., ob. cit., p. 184, saca a colación la SAP de Baleares de 28 de enero de 2000 que estableció lo siguiente: “lo que no acepta la Sala es que, so pretexto de que coincida la verdad material con la formal, pueda D. Sebastián cuando le convenga (no por haber concurrido error en las circunstancias del reconocimiento que, como se ha dicho, fue de complacencia) desdecirse de lo que de forma tan solemne y libre manifestó en su día ante el Encargado del Registro Civil, obligándose a las consecuencias de comportarse como padre de la reconocida aceptando ser tenido como tal aun sabiendo que biológicamente no lo era. En definitiva, dada la importancia extrema que cuestiones, como la presente poseen, resulta evidente que, formulado el reconocimiento con todas las garantías, no puede quien así quiso expresarse, retractarse después caprichosamente o al menos sin justificación del aparente motivo que invoca, queriendo revocar su declaración”.

³² DÍAZ ALABART, S., “Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Julio de 2011 (5546/2011). Impugnación de filiación no matrimonial determinada por un reconocimiento de complacencia”, en: *Comentarios a las Sentencias de Unificación de Doctrina. Civil y Mercantil*, Dykinson, Madrid, 2016, pp. 333-335.

cuarto lugar, considera que la doctrina de los actos propios³³ no permite que un acto jurídico libre y voluntario pueda ser objeto de revocación arbitraria³⁴.

Así, en este sentido, PEÑA BERNALDO DE QUICIOS califica los reconocimientos de complacencia como actos ilícitos, considerando que no pueden ser impugnados por el reconocedor porque “nadie puede invocar con éxito ante los Tribunales su propia torpeza”. El autor defiende que la verdad biológica debe ser buscada por otras personas legitimadas a quien perjudica esa filiación³⁵.

En este sentido QUICIOS MOLINA defiende que el interés del menor no reside en el descubrimiento de la verdad, sino en “mantener cubiertas las necesidades vitales” por lo que se cuestiona retóricamente si un menor de edad no puede tener un alimentante que voluntariamente ha asumido esa obligación, aunque no sea su padre biológico. La autora entiende que lo más lógico es negar la legitimación activa al reconocedor que intenta impugnar la paternidad, ya que reconoció al hijo a sabiendas de que no era el verdadero padre³⁶.

2.2.3.4. RECONOCIMIENTO DE CONVENIENCIA

La STS 494/2016, de 15 de julio de 2016, distingue lo que son los reconocimientos de complacencia de los reconocimientos de conveniencia. Los dos reconocimientos parten de la premisa de ser situaciones donde el reconocedor declara su voluntad de reconocer a alguien como hijo suyo siendo consiente de la falta de relación biológica entre ambos. No obstante, dichas situaciones se diferencian por las razones que llevan a alguien a

³³ Según la STC 73/1988, de 21 de abril de 1988: “la llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de *venire contra factum proprium* surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos”.

³⁴ De esta misma opinión es el magistrado Xavier O’Callaghan que emite voto particular a la STS 318/2011, de 4 de julio de 2011. El magistrado llega a sostener que “admitir la revocabilidad unilateral de un reconocimiento de complacencia es un auténtico error de bulto”. En el mismo sentido resuelve la STS 793/2004, de 14 de julio de 2004, la SAP de Zaragoza 421/20203, de 14 de julio de 2003 y la SAP de Murcia 236/2005 de 15 de julio de 2005.

³⁵ PEÑA Y BERNALDO DE QUICIÓS, M., “De la Paternidad y Filiación”, en: *Comentarios a las reformas del Derecho de Familia*, vol. I, editorial Tecnos, Madrid, 1984, p. 1013.

³⁶ QUICIOS MOLINA, S., ob. cit., p. 185.

reconocer al reconocido. Si el reconocimiento de complacencia se hace con el deseo de actuar como padre del reconocedor, el reconocimiento de conveniencia se realiza “con la finalidad de crear una mera apariencia de que existe dicha relación de filiación, en orden a conseguir la consecuencia jurídica favorable de una norma (sobre nacionalidad, permisos de residencia, beneficios sociales, etc.) cuyo supuesto de hecho la requiere”. Por tanto, en el reconocimiento por conveniencia el reconocedor de la filiación en ningún caso pretende ejercer como padre si no que tiene como objetivo la obtención de privilegios colateral de la filiación, así como la nacionalidad española o la residencia³⁷.

La jurisprudencia entiende que el reconocimiento de conveniencia es en fraude de ley y, por lo tanto, su consecuencia es la nulidad. La STS 494/2016, de 15 de julio, equipara los efectos del reconocimiento de conveniencia al artículo 235-27 CCCat que establece que “el reconocimiento de paternidad hecho en fraude de ley es nulo. La acción de nulidad es imprescriptible y puede ser ejercida por el Ministerio Fiscal o por cualquier otra persona con interés legítimo y directo”.

Los reconocimientos de complacencia, según la sentencia 494/2016, de 15 de julio, y atendiendo al artículo 6.4 CC, no pueden ser considerados en fraude de ley porque el reconocimiento de complacencia “no vale para establecer una filiación adoptiva entre el reconocedor y el reconocido”. La referida sentencia tilda de inaceptable las consecuencias que supondría la nulidad de los reconocimientos de complacencia³⁸.

De este modo, los reconocimientos de complacencia no se interpretan como un fraude de ley, ya que su finalidad no está prohibida por el ordenamiento jurídico, sino al contrario, está regulada por el legislador. Tal como argumenta GONZALEZ PÉREZ DE CASTRO, “los reconocimientos de complacencia no buscan eludir las normas de filiación, sino determinar verdaderamente un vínculo-filial para que éste despliegue todos sus efectos”³⁹. Por tanto, entendemos que el artículo 235-27 CCCat no es de aplicación para los casos de impugnación de los reconocimientos de complacencia.

³⁷ MUÑOZ DE DIOS SÁEZ, L. F., “El reconocimiento de complacencia ante notario”, en: *Revista de derecho civil*, vol. 4, nº 4, octubre-diciembre 2017, p. 243.

³⁸ LÓPEZ DONAIRE, M. B., “Comentario de la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Nº 494/2016 de 15 de julio de 2016, Rec. 1290/2015 fijación de doctrina jurisprudencial sobre el reconocimiento de filiación por complacencia. Validez. Posibilidad de impugnación. Plazos”, en: *Gabilex, revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha*, nº 7, septiembre 2016, pp. 337-346.

³⁹ GONZÁLEZ PÉREZ DE CASTRO, M., ob. cit., p. 177.

Aplicando todos estos razonamientos al caso, podemos afirmar que el reconocimiento que realizó el Sr. Jaguar es un reconocimiento de complacencia, ya que, en primer lugar, el reconocimiento se efectuó a sabiendas de que él no era el padre biológico, y en segundo lugar, no existen datos objetivos que presuman la intención de obtener beneficios o privilegios a raíz de la filiación.

Por otro lado, a través de la doctrina y jurisprudencia actual podemos defender la validez del reconocimiento de complacencia, y además, impedir la impugnación del reconocimiento por parte del Sr. Jaguar atendiendo al carácter irrevocable del reconocimiento.

2.2.4. ACCIONES DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD

El tratamiento legal de la impugnación de la paternidad en la normativa catalana, del mismo modo que en la determinación de la filiación, se diferencia dependiendo si la filiación es matrimonial o extramatrimonial.

A través de los artículos 235-23 a 235-25 CCCat se puede impugnar la paternidad matrimonial. Están legitimados para hacerlo: el marido, la madre y el hijo.

El marido puede impugnar la paternidad en el plazo de dos años desde que conoce el nacimiento del hijo o el descubrimiento de las pruebas que fundamentan la impugnación. La madre puede impugnar la paternidad matrimonial en nombre propio o en interés y representación del hijo, si es menor o incapaz, en el plazo de dos años desde el nacimiento del hijo o del descubrimiento de las pruebas que fundamentan la impugnación. Por último, el hijo puede impugnar la paternidad en el plazo de dos años desde que cumple la mayoría de edad, desde que recupera la capacidad o desde el descubrimiento de las pruebas que fundamentan la impugnación.

La impugnación de la paternidad matrimonial por parte del marido, se transmite a los hijos y herederos si el marido muere después de haber interpuesto la acción o antes que finalicen los plazos para impugnar⁴⁰.

⁴⁰ GETE-ALONSO Y CALERA, M. C.; YSÀS SOLANES, M.; SOLÉ RESINA, J., ob. cit., pp. 57-58.

Por otro lado, el artículo 235-26 CCCat aborda la impugnación de la paternidad no matrimonial. Están legitimados para impugnar esta paternidad: el padre, la madre y los hijos (y sus representantes legales) en el plazo de dos años desde que se establece la paternidad, desde el conocimiento de la paternidad o desde la aparición de pruebas contrarias a la paternidad. No obstante, en el caso que el hijo impugne la paternidad no matrimonial, el plazo viene determinado por su mayoría de edad, la recuperación de la capacidad o la aparición de pruebas contrarias a la paternidad.

Por otra parte, el artículo 235-27 CCCat prevé la impugnación del reconocimiento de la paternidad a través de una acción de nulidad cuando el reconocimiento se haya hecho sin capacidad, por error, violencia, intimidación o dolo, por quien otorgó el reconocimiento o por sus herederos, descendientes o representantes legales⁴¹.

Esta acción se halla sometida al plazo de caducidad de dos años. Cuando se impugna por falta de capacidad, la acción caduca a los dos años de cumplir la mayoría de edad o la recuperación de la capacidad. Cuando se impugna por vicio de la voluntad, la acción caduca a los dos años desde el otorgamiento del reconocimiento. Por último, en los casos restantes, la acción caduca a los dos años desde que cesa el vicio.

Por otra parte, en relación con la legitimación pasiva y de acuerdo con el artículo 766 LEC, en los procesos de filiación serán partes los progenitores y el hijo en virtud de la filiación establecida. Por tanto, si es el marido quien interpone la demanda deberá ir dirigida a la madre y al hijo, si es la madre quien la interpone deberá ir dirigida al padre e hijo y si es el hijo quien la interpone deberá ir dirigida a ambos progenitores⁴².

Tal y como hemos analizado antes, en nuestro caso, estamos ante un reconocimiento de complacencia el cual es considerado matrimonial por la celebración del matrimonio en fecha posterior al reconocimiento (Art. 235-7 CCCat). No obstante, dicha impugnación se regirá por las normas de la filiación no matrimonial.

⁴¹ BARBER CÁRCAMO, R., *La filiación en España: Una visión crítica*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, p. 282.

⁴² GALLO VÉLEZ, A. S., ob. cit., p. 270.

La impugnación de la paternidad derivada de un reconocimiento de complacencia tiene como objeto la relación de filiación y no el título que lo determinó⁴³. En dichos procedimientos no se plantea impugnar el reconocimiento de complacencia como acto, ya que el reconocimiento no fue hecho sin capacidad, por error, violencia o intimidación, sino lo que se plantea es impugnar la propia paternidad que deriva del reconocimiento por no corresponder con la verdad biológica⁴⁴. En este caso, la impugnación se realizará a través del artículo 235-26 CCCat en cual establece un plazo de dos años desde el establecimiento de esta paternidad.

Si podemos acreditar a través del certificado del acta de reconocimiento de la paternidad que el Sr. Jaguar realizó el reconocimiento de Eva ante el encargado del Registro Civil con anterioridad al mes de mayo de 2016, podremos alegar la caducidad de la acción ejercitada por el Sr. Jaguar⁴⁵.

2.2.5. MEDIDAS CAUTELARES

Teniendo en cuenta el propósito que persigue el demandante a la hora de interponer la demanda de impugnación de la paternidad, es probable que nada más interponer la demanda el padre desatienda sus obligaciones paterno-filiales. Basándonos en esto y asumiendo que el procedimiento se demorará en el tiempo, es factible la adopción de medidas cautelares para la protección del interés del menor durante el procedimiento.

El artículo 235-17 del CCCat permite que el órgano judicial adopte medidas cautelares de protección a favor del menor mientras dura el procedimiento de impugnación de la filiación, finalizando éstas una vez la sentencia sea firme (art. 731 LEC).

Asimismo, ante esta situación, el artículo 768 LEC en relación con los procedimientos de impugnación de la paternidad, contempla la posibilidad de adoptar medidas cautelares oportunas sobre la persona y bienes del sometido a la potestad, sin la obligación del artículo 728.3 LEC de prestar caución⁴⁶. El precepto continua y establece

⁴³ *Ibidem.*, p. 223.

⁴⁴ PANIZA FULLANA, A., *ob. cit.*, p. 59.

⁴⁵ En el mismo sentido se pronuncia la SAP de Tarragona 119/2017, de 17 de marzo de 2017.

⁴⁶ BARBER CÁRCAMO, R., *ob. cit.*, pp. 230-231.

que las medidas cautelares pueden ser solicitadas a instancia de parte o adoptadas de oficio.

Las medidas cautelares que podemos adoptar en estas situaciones pueden tener un contenido personal o patrimonial, aunque no están tasadas expresamente por la ley. Por ello, además de la provisión de alimentos, el órgano judicial puede adoptar aquellas medidas que crea oportunas para la protección del menor, así como la atribución del ejercicio exclusivo de la patria potestad y la guarda y custodia, sin tener la otra parte derecho a un régimen de visitas⁴⁷. Para la fijación de los alimentos debemos atender al artículo 237 CCCat y aplicar el criterio de proporcionalidad entre el patrimonio y las rendas de quien lo tiene que prestar y las necesidades de quien lo recibe.

En cuanto al trámite procesal, las partes podrán solicitar medidas cautelares en la demandada o en la contestación y se acordaran mediante previa audiencia de las personas que se vean afectadas, siendo de aplicación los artículos 734, 735 y 736 LEC. En caso de urgencia, el tribunal citara a los interesados en el plazo de diez días y podrá acordar, a través de un auto, de manera razonada y tras oír las alegaciones de los comparecientes, la fijación de estas medidas cautelares⁴⁸.

En relación al caso, la Sra. López ante esta situación, podrá pedir en la contestación de la demanda la adopción de medidas cautelares, solicitando la fijación de medidas a favor de la menor, así como alimentos provisionales, desde la interposición de la demanda hasta que la sentencia sea firme, para asegurar el bienestar de la menor⁴⁹.

2.2.6. RECLAMACIÓN DE LAS CANTIDADES SUFRAGADAS POR EL ACTOR EN CONCEPTO DE ALIMENTOS

A parte de impugnar la paternidad, la parte demandante puede reclamar la devolución de todo el dinero que se gastó en concepto de alimentos para el menor y los intereses

⁴⁷ PÉREZ MARTÍN, A. J., *Acciones de filiación. Determinación, reclamación e impugnación. Acciones derivadas del cambio de filiación*, Lex Nova, Valladolid, 2010, pp. 669-673.

⁴⁸ FARNÓS I AMORÓS, E., “La impugnació de la filiació”, en: EGEA FERNÁNDEZ, J; FERRER RIBA, J., *Comentari al llibre segon del Codi civil de Catalunya: família i relacions convivencials d’ajuda mútua*, Atelier, Barcelona, 2014, p. 628.

⁴⁹ En este sentido se pronuncia el AAP de Madrid 90/2009, de 17 de marzo de 2009.

correspondientes a esa cantidad. La cuestión legal que se plantea es si se puede admitir, ante una sentencia que declara la inexistencia de paternidad, la acción de enriquecimiento injusto a través del artículo 1895 del CC⁵⁰ a fin de reclamar la devolución con carácter retroactivo de los alimentos entregados a la menor.

Para el caso que se declare la inexistencia de la paternidad, resulta absurdo pensar que su autor podrá reclamar las cantidades sufragadas en concepto de alimentos a favor del hijo. A raíz del reconocimiento ante el encargado del Registro Civil se determina la filiación de la menor y es a partir de allí cuando surgen los efectos de la filiación. Tal como establece el artículo 235-2.2 CCCat la filiación “comporta la asunción de responsabilidades parentales hacia los hijos menores y los demás efectos establecidos por las leyes”. Basándonos en esto, la obligación legal de alimentos a favor del menor surge con el reconocimiento y se extingue con la estimación de la impugnación de la paternidad.

Para dar respuesta a esta cuestión, el Tribunal Supremo ha declarado en la STS 202/2016, de 24 de abril de 2015⁵¹, que no es posible la acción del cobro de lo indebido, ya que la prestación de alimentos es una obligación legal que surge con la filiación y no se destruye hasta que se estima la impugnación de la paternidad. Además, el efecto retroactivo de la determinación de la filiación legal solo actúa cuando los efectos son positivos⁵².

Además, el mismo artículo de la apropiación indebida establece que debe haber error de quien ha entregado la cosa. En los reconocimientos de complacencia no existe error por

⁵⁰ El Código Civil, en su artículo 1895 establece que “Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla”.

⁵¹ La STS 202/2016, de 24 de abril de 2015 argumentó lo siguiente: “El derecho a los alimentos de la hija existía, por tanto, por el hecho de haber nacido dentro del matrimonio y como consecuencia de esa apariencia de paternidad el padre hizo frente a todas las obligaciones que le correspondían, entre las que se encontraba no solo la manutención económica, sino la de velar por ella, tenerla en su compañía, educarla, formarla, representarla y administrar sus bienes. Por tanto, los pagos se hicieron como consecuencia de una obligación legalmente impuesta entre quien pagaba y quien se beneficiaba de dicha prestación, y es efectiva hasta que se destruye esta realidad biológica mediante sentencia dictada en proceso de impugnación de la filiación matrimonial, lo que hace inviable la acción formulada de cobro de lo indebido. La filiación, dice el artículo 112 CC produce sus efectos desde que tiene lugar”, y “su determinación legal tiene efectos retroactivos, siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquéllos y la ley no disponga lo contrario”; efecto retroactivo de la determinación legal de la filiación que opera cuando éste sea positivo para el menor, pero no en el supuesto contrario, como sucede en otros casos”.

⁵² GARCÍA GARCÍA, N.; CANTURIENSE SANTOS, A., *El interés superior del menor. Jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo*, Sepín, Madrid, 2017, pp. 55-56

parte del reconocedor, puesto que él sabía en todo momento que pagaba los alimentos a sabiendas de que no era el padre biológico. El padre actuó en todo momento siendo consiente de su no paternidad⁵³.

2.2.7. RECLAMACIÓN DE UNA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS AL MENOR: RESPONSABILIDAD DEL RECONOCEDOR

En los procedimientos que se estima la impugnación de la paternidad, y sobretodo en los reconocimientos de complacencia, quien sale más perjudicado y afectado es el menor de edad. Tenemos que tener presente que el reconocer de manera voluntaria decidió reconocer al menor siendo consiente que no era el padre biológico, afectando la vida y los intereses del mismo, sin que éste pidiese esta situación.

Como consecuencia de la destrucción de la paternidad el menor pierde la relación paternal con el reconocedor, repercutiéndole tanto en la esfera personal como en la económica. A raíz de esto, se podrá reclamar una indemnización por el daño moral que se le ha causado y se le causará al menor por la sobrevenida inexistencia de paternidad y por la pérdida del apellido y de un status familiar y social. Por otro lado, también se podrá reclamar una indemnización económica por la pensión de alimentos que el reconocedor hubiera pagado hasta que el menor hubiese cumplido la mayoría de edad.

En atención a lo anterior, se plantea una acción de responsabilidad civil conforme al artículo 1902 CC, ya que se entiende que los perjuicios ocasionados provienen de la actuación nula que realiza el reconocedor. Según RIVERO HERNÁNDEZ, en relación con la acción de impugnación, argumenta que “su ejercicio sólo ha puesto de manifiesto la irrealidad de la filiación impugnada, y los perjuicios que indemnizar no derivan tanto de la sentencia cuanto del acto ilícito inicial (reconocimiento consiente mentiroso, filiación creada de forma éticamente irregular, aunque legalmente permitida)”⁵⁴.

⁵³ En este sentido se pronuncia RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Los reconocimientos de complacencia...*, ob. cit., pp. 1110-1111: “Entiendo que no puede reclamar su devolución, porque ninguna norma del CC sobre el pago de la indebido lo ampara, máxime en tanto que el reconocedor actuó de mala fe”.

⁵⁴ RIVERO HERNANDEZ, F., *Las acciones de filiación en el Código de familia catalán*, Atelier, Barcelona, 2001, p. 399.

No obstante esto, no existen ejemplos claros en nuestra jurisprudencia en que la madre, como representante legal del hijo, haya reclamado indemnización por daño moral o económico ocasionado al hijo⁵⁵. Como excepción, la SAP de Zaragoza 421/2003, de 14 de julio de 2003, en la que se condenó al reconocedor al pago de los daños y perjuicios que el reconocedor había causado al menor. Así lo argumentaba:

“En este caso, el menor tendría derecho a ser indemnizado por los daños que le causa la declaración de nulidad del reconocimiento (art. 1902 en relación con el art. 7 CC), que no son otros que la prestación de alimentos y en su caso el daño moral por la pérdida, si es el caso, del *status familia*. Con esta actitud, se desincentivarían los reconocimientos de complacencia (en estos caso lo que se debería haber hecho es adoptar y no reconocer), estas consecuencias son generalmente admitidas por la jurisprudencia francesa, que prevé la subsistencia de los derechos del hijo frente al falso progenitor hasta su mayoría de edad. Lo mismo podríamos conseguir en Derecho español a través de las consecuencias que la teoría general del Derecho aplica a la nulidad conscientemente provocada”.

En definitiva, además de ser una manera de defender los intereses del menor evitando que la repentina inexistencia de paternidad perjudique lo menos posible al menor, esta opción, tal y como indica DÍAZ ALABART “sería una buena herramienta para obligar a reflexionar a quienes, de una forma un tanto frívola declaran ser padres sabiendo no serlo, y posteriormente impugnan la filiación que se determinó por el reconocimiento, causando daños a los sujetos más necesitados de protección”⁵⁶.

⁵⁵ Señala RIVERO HERNANDEZ, F., *Los reconocimientos de complacencia...*, ob. cit., p. 1111, que en la jurisprudencia francesa, en los procedimientos de impugnación del reconocimiento de complacencia, es habitual que se condene al reconocedor por los daños y perjuicios ocasionados al hijo y también a terceras personas “por haber suscitado conscientemente un reconocimiento inexacto que confería al hijo un estado aparente esencialmente precario y que dependía luego de él, de hacerlo desaparecer”. Añade el autor, que el Derecho francés entiende que la “no ejecución de ese compromiso resultante de la anulación del reconocimiento debe sancionarse con la responsabilidad por perjuicios”.

⁵⁶ DÍAZ ALABART, S., ob. cit., pp. 336-337.

3. CONCLUSIONES

I.- Los llamados reconocimientos de complacencia son admitidos socialmente y cada vez más frecuentes en la sociedad catalana. Sin embargo, su posible impugnación no ha sido regulada expresamente.

II.- A través de la doctrina y jurisprudencia podemos definir el reconocimiento de complacencia como la declaración mediante la cual el autor del reconocimiento reconoce a un hijo como suyo, a sabiendas de que no es el padre biológico. En el momento de realizar el reconocimiento, el reconocedor tiene la intención y deseo de ejercer de padre.

III.- La mayoría de reconocimientos de complacencia se determinan mediante reconocimiento ante el encargado del Registro Civil. El reconocimiento es un acto formal, voluntario e irrevocable al que la ley atribuye el efecto de la determinación de la filiación. Aunque este reconocimiento debe estar basado en una relación filial biológica, no existen los controles oportunos para verificar que todo acto de reconocimiento está basado en la verdad biológica.

IV.- La doctrina mayoritaria considera los reconocimientos de complacencia válidos para determinar la filiación aunque no respeten el principio de verdad biológica, atendiendo a que el reconocimiento no es contrario a ley, ni a la moral, ni al orden público ni su intención es defraudar las normas sobre la adopción. Esta doctrina considera que la declaración de nulidad de dichos reconocimientos sería contraria a la estabilidad del estado civil, al interés de los menores de edad y al principio de seguridad jurídica.

V.- A pesar de que el reconocimiento es irrevocable, la jurisprudencia mayoritaria no priva al reconocedor de impugnar la paternidad determinada por un reconocimiento de complacencia.

A la hora de impugnar dichos reconocimientos no se plantea impugnar el reconocimiento como acto jurídico, ya que el reconocedor en todo momento sabía que no era el padre biológico, sino impugnar la relación de filiación basada en la

inexistencia de veracidad biológica. Según el artículo 235-26 CCCat, el plazo para que el padre pueda ejercer la acción de impugnación de la paternidad determinada legalmente por el reconocimiento de complacencia, caduca a los dos años desde la realización del reconocimiento.

En el procedimiento de impugnación de la paternidad la competencia judicial corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio del demandado, y si lo tuviera en el extranjero el de la última residencia en España. Estos procedimientos serán tramitados por las reglas del juicio verbal y deberá ser parte el Ministerio fiscal, asistiendo las partes preceptivamente con abogado y procurador. En cuanto a la ley aplicable en estos casos, se aplicará en primer lugar la ley de la residencia habitual del menor. Subsidiariamente, se aplicará la ley nacional del hijo y finalmente, si ninguna de las dos opciones anteriores fuere posible, la ley sustantiva española.

A pesar de lo anterior, existe una corriente minoritaria que considera que dichos reconocimientos no son impugnables, ya que en caso contrario se estaría realizando una revocación de un acto que es irrevocable.

VI.- En los procesos de impugnación de la paternidad derivada de un reconocimiento de complacencia entran en juego dos principios constitucionales: el principio de verdad biológica y el interés superior del menor. Aunque en materia de filiación por naturaleza el ordenamiento jurídico catalán se basa en el principio de verdad biológica, éste no es absoluto, ya que en primer lugar, el legislador, en el momento de establecer plazos cortos de impugnación, asumió que la filiación formal en algunos casos no coincidiría con la verdad biológica y, en segundo lugar, el legislador estableció que los hijos que nacen a consecuencia de las técnicas de reproducción asistida, se equiparan al hijo por naturaleza. Para proteger con mayor intensidad los intereses del menor se debería desligar el principio de veracidad biológica de nuestro ordenamiento jurídico en materia de filiación por naturaleza.

VII.- Ante la acción de impugnación de la paternidad por parte del padre, la parte demandada puede solicitar medidas cautelares para evitar que esta acción suponga un desequilibrio personal y/o económico para el menor.

VIII.- A parte de ejercitar la acción de impugnación, la parte actora puede intentar reclamar la devolución de las cantidades sufragadas en concepto de alimentos durante la existencia de la filiación a través de la acción de enriquecimiento injusto regulado en el artículo 1895 CC. No obstante, el Tribunal Supremo se ha pronunciado alegando que no es posible dicha acción, basándose en que las obligaciones legales surgidas en el momento de la determinación de la filiación no se extinguen hasta que se destruye, no pudiendo actuar en dicho caso el principio de retroactividad.

IX.- Ante la impugnación de la paternidad, la parte demandada podrá reclamar al padre, a través del artículo 1902 CC, los daños y perjuicios morales y económicos ocasionados al hijo a raíz de la demanda y a consecuencia del reconocimiento, atendiendo a que el reconocedor al momento de realizar el reconocimiento y asumir las responsabilidades que conlleva la paternidad era consciente de que no era el padre biológico.

X.- Los reconocimientos de complacencia se diferencian de los reconocimientos de conveniencia. En los dos, el autor del reconocimiento declara ser padre de alguien de quien biológicamente no lo es, pero en los reconocimientos de conveniencia no existe voluntad real de ejercer como padre sino que la voluntad está fundada en el hecho de obtener algún privilegio colateral a la filiación, así como la obtención de la nacionalidad. Estos reconocimientos son en fraude de ley y su impugnación es imprescriptible.

XI.- A causa de la falta de regulación legal y las resoluciones judiciales contradictorias, los reconocimientos de complacencia viven en una laguna legal que genera inseguridad jurídica tanto al reconocedor como al reconocido. Es necesario plantearse una nueva regulación más consciente de la complejidad actual de la situación, que resuelva sin desatender o menoscabar el interés del menor.

EMISIÓN DEL DICTAMEN

Del análisis jurídico objeto del presente dictamen, a petición de la Sra. López (parte demandada), se extraen las siguientes recomendaciones:

Al tratarse de un conflicto de carácter familiar en el que la figura del menor es tan frágil, siempre es aconsejable llegar a un acuerdo entre los intervinientes a través de una mediación familiar. De no ser posible, contestaremos a la demanda de impugnación de la paternidad con el objetivo de que se desestimen las pretensiones del actor.

Primeramente, antes de nada, debemos centrarnos en defender que estamos ante un reconocimiento de complacencia y no de un reconocimiento de conveniencia, ya que el tratamiento legal del segundo nos perjudica. A través de escritos, mensajes, fotografías o del certificado literal de matrimonio podemos probar que el reconocimiento se hizo con la finalidad de crear un vínculo paterno-filial entre el Sr. Jaguar y Eva y que, en ningún caso, fue para la obtención de privilegios, como por ejemplo la residencia.

La estrategia principal a seguir en la contestación de la demanda será alegar la caducidad de la acción de impugnación de la paternidad instada por el Sr. Jaguar a través del artículo 235-26 CCCat, acreditando el transcurso del plazo de dos años desde que se efectuó el reconocimiento de Eva. Con la finalidad de probar dicha caducidad aportaremos el certificado del acta de reconocimiento de la paternidad de Eva por parte del Sr. Jaguar y el certificado literal de nacimiento de Eva inscrito en el Registro Civil.

Subsidiariamente, para el supuesto que no se aprecie la caducada de la acción, la estrategia seguida será defender a través de la jurisprudencia mayoritaria la validez de este reconocimiento a pesar de que la realidad biológica no coincide con la realidad formal. A través de dicha jurisprudencia defenderemos que el reconocimiento no es contrario a ley, ni a la moral, ni al orden público ni tampoco es en fraude de ley. Posteriormente, a través de la jurisprudencia minoritaria, defenderemos el carácter irrevocable del reconocimiento de complacencia alegando que el Sr. Jaguar manifestó voluntariamente y con ello asumió las responsabilidades que conlleva la filiación. Asimismo, sostendremos dichos pronunciamientos defendiendo que el principio de

verdad biológica se debe ajustar a la estabilidad del estado civil y al interés superior del menor y no al revés.

En todo caso, solicitaremos la denegación de la devolución a la parte actora de las cantidades sufragadas en concepto de alimentos, alegando la jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera que la obligación legal de alimentos surge con la filiación y se extingue cuando ésta se destruya, sin que tenga efectos retroactivos.

Además, solicitaremos al Juzgado, mediante otro sí digo, que se adopten medidas cautelares mientras dura el procedimiento judicial en las que se fije una pensión de alimentos para que dicha situación perjudique lo menos posible a la menor. Para poder fijar la cuantía solicitaremos información patrimonial del Sr. Jaguar.

Por otro lado, una vez finalizado el procedimiento de impugnación y en el caso que se desestime la demanda, recomendaré a mi cliente interponer demanda de divorcio a fin de poder fijar medidas definitivas para la menor. Conjuntamente interpondremos demanda de medidas coetáneas o provisionales para poder agilizar la adopción de dichas medidas.

Asimismo, asesoraré a mi cliente de la posibilidad de interponer una demanda de responsabilidad civil por los daños y perjuicios morales que ha sufrido Eva a raíz de la demanda y como consecuencia del acto de reconocimiento, tanto si se estima o se desestima la demanda, aportando para ello un informe psicológico de la menor. Además, en caso que se estimase la demanda, conjuntamente con los daños morales, podríamos solicitar una indemnización económica por la pérdida de la pensión de alimentos a la que Eva tendría derecho hasta su mayoría de edad.

BIBLIOGRAFÍA

ADAM MUÑOZ, M^a Dolores. “La nueva regulación de la filiación natural en el derecho internacional privado español”. En: *Cuadernos de Derecho Transnacional*. Madrid: vol. 8, n^o 2, octubre 2016, pp. 34-54. ISSN 1989-4570.

BARBER CÁRCAMO, Roncesvalles. *La filiación en España: Una visión crítica*. 1^a ed. Cizur Menor (Navarra): editorial Aranzadi, 2013. ISBN 978-84-9059-104-9.

CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. “Ley aplicable a la filiación por naturaleza: de la ley nacional a la ley de la residencia habitual del hijo”. En: *Revista Española de Derecho Internacional*. Madrid: vol. 68, n^o 2, julio-diciembre 2016, pp. 157-182. ISSN 0034-9380.

DÍAZ ALABART, Silvia. “Impugnación de filiación no matrimonial determinada por un reconocimiento de complacencia. Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2011 (5546/2011)”. En: IZQUIERDO TOLSADA, Mariano. *Comentarios a las Sentencias de Unificación de Doctrina. Civil y Mercantil*. 1^a ed. Madrid: editorial Dykinson, vol. 5, 2016, pp. 327-228. ISBN 978-84-9085-868-4.

FARNÓS I AMORÓS; Esther. “La impugnació de la filiació”. En: EGEA FERNÁNDEZ, Joan; FERRER RIBA, José. *Comentari al llibre segon del Codi civil de Catalunya: familia i relacions convivencials d’ajuda mútua*, 1^a ed. Barcelona: editorial Atelier, 2014. ISBN 978-84-15690-47-4.

GALLO VÉLEZ, Ana Silvia. *Los reconocimientos de complacencia en el Derecho Común español*. 1^a ed. Madrid: editorial Dykinson, 2017. ISBN 978-84-9148-189-8.

GARCÍA GARCÍA, Natalia; CANTURIENSE SANTOS, Ana., *El interés superior del menor. Jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo*. 1^a ed. Madrid: editorial Sepín, 2017. ISBN 978-84-17009-25-0.

GETE-ALONSO Y CALERA, M^a del Carmen; YSÀS SOLANES, María; SOLÉ RESINA, Judith. *Derecho de familia vigente en Cataluña*. 2^a ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. ISBN 978-84-9985-003-0.

GONZÁLEZ PÉREZ DE CASTRO, Maricela. *La verdad biológica en la determinación de la filiación*. 1^a ed. Madrid: editorial Dykinson, 2013. ISBN 978-84-9031-661-0.

LÓPEZ DONAIRE, M^a Belén. “Comentario de la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo N° 494/2016 de 15 de julio de 2016, Rec. 1290/2015 fijación de doctrina jurisprudencial sobre el reconocimiento de filiación por complacencia. Validez. Posibilidad de impugnación. Plazos”. En: *Gabilex, Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha*. Castilla-La Mancha: n° 7, septiembre de 2016, pp. 337-346. ISSN 2386-8104.

LORENTE MARTÍNEZ, Isabel. “Filiación natural. El artículo 9.4 del Código Civil y el triunfo de la residencia habitual del hijo”. En: *Cuadernos de Derecho transnacional*. Madrid: vol. 10, n° 1, marzo de 2018, pp. 592-600. ISSN 1989-4570.

MUÑOZ DE DIOS SÁEZ, Luis F. “El reconocimiento de complacencia ante notario”. En: *Revista de Derecho Civil*. Madrid: vol. IV, n° 4, octubre-diciembre de 2017, pp. 237-264. ISSN 2341-2216.

PADIAL ALBAS, Adoración. *La relación materno y paterno filial en el derecho de familia catalán*. 1^a ed. Cizur Menor (Navarra): editorial Aranzadi, 2018. ISBN 978-84-9177-832-5.

PANIZA FULLANA, Antonia. *Realidad biológica versus realidad jurídica: el necesario replanteamiento de la filiación*. 1^a ed. Cizur Menor (Navarra): editorial Aranzadi, 2017, pp. 53-66. ISBN 978-84-9177-502-7.

PEÑA Y BERNALDO DE QUICIÓS, Manuel. “De la Paternidad y Filiación”. En: *Comentarios a las reformas del Derecho de Familia*. 1^a ed. Madrid: editorial Tecnos, vol. I, 1984, pp. 775-1.022. ISBN 84-309-1024-7.

PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier. *Acciones de filiación. Determinación, reclamación e impugnación. Acciones derivadas del cambio de filiación*. 1ª ed. Valladolid: editorial Lex Nova, 2010. ISBN 978-84-9898-220-6.

QUICIOS MOLINA, Susana. *Determinación e impugnación de la filiación*. 1ª ed. Cizur Menor (Navarra), editorial Aranzadi, 2014. ISBN 978-84-9059-539-8.

RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. *Las acciones de filiación en el Código de familia catalán*. 1ª ed. Barcelona: editorial Atelier, 2001. ISBN 84-95458-29-3.

RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. “Los reconocimientos de complacencia (Con ocasión de unas sentencias recientes)”. En: *Anuario de Derecho Civil*. Madrid: vol. 58, núm. 3º, julio-septiembre de 2005, pp. 1049-1114. ISSN 0210-301X.